POLITICA FAMILIAR

Dr. Enrique Joaquín Repetti

I.

Uno de los temas que preocupan a la sociedad en general es el de establecer un ordenamiento legal de protección y amparo a la familia.

La familia como tal no encuentra recepción legislativa en nuestro ordenamiento positivo y prácticamente en ninguno de los códigos civiles contemporáneos. Ello es así porque de legislarse sobre la institución de la familia debe abstraérsela de los integrantes que la forman y constituir una persona de existencia ideal que tenga nombre, patrimonio y encuentren regulados los distintos derechos y deberes de los integrantes, etc.

Es por ello que al hablar de familia nos referimos en realidad a las relaciones derivadas del matrimonio, del parentesco y de la adopción. Familia en el sentido corriente se encuentra definida por el diccionario de la Real Academia Española que dice "Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas". Esta definición se refiere al concepto patriarcal de la familia que no es el que corresponde a la normativa jurídica actual.

La Ley 14.394 única norma que define a la familia, en su art.36 dice: "Se entiende por familia la constituida por el propietario y su cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos o en defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta el 3er. grado inclusive de consanguinidad que convivieren con el constituyente".

Se puede decir que sociológicamente todas las personas vinculadas por relación de parentesco natural o adoptivo reciben el nombre de familiares, convivan o no entre sí, y de esta manera se encuentran unidas en razón de principios comunes a todos ellos. Desde el punto de vista de la normativa jurídica la familia comprende a todas las personas vinculadas por el parentesco, ya sea éste consanguíneo, afín o de adopción. La mayor o menor aproximación al

tronco común determinará los derechos y deberes de cada uno de ellos. Se tiene así lo que puede denominarse "gran familia" que es ese conjunto de personas así vinculadas; su mayor o menor aproximación por semejanza de principios comunes sociales, religiosos, políticos, etc. determinará una mayor o menor unión de lazos familiares, sin que ello implique pérdida de los derechos y deberes civiles. En cuanto a los derechos de la concubina la reforma efectuada en las leyes N°18.037 y 18.038 por la ley 23.226 les reconoce derechos a percibir la pensión del causante ya sea en forma exclusiva o compartida con la cónyuge.

En síntesis, para el ordenamiento civil, el hecho o no de la convivencia no modifica la situación jurídica de los integrantes de la familia. Lo que sí debe considerarse es que en esta materia es importante tener en cuenta el factor edad, por cuanto los hijos menores están sujetos a los derechos y deberes emergentes de la patria potestad. Por lo tanto, al mencionar las normas jurídicas, debe considerarse a la familia como hemos dicho al principio o sea, relaciones derivadas del matrimonio, del parentesco y de la adopción.

En nuestro país no se recepta jurídicamente la figura del concubinato, llamada por algunos matrimonios de hecho, etc., no asignándole derecho y deberes emergentes del mismo como tal, aún cuando en algunos ordenamientos jurídicos se brinde algún amparo al concubino o concubina emergente de una relación de naturaleza jurídica alimentaria.

La política familiar es el conjunto de normas que el Estado prevé para el amparo y protección de la familia. Esta protección tiene su raíz en la Constitución Nacional que en su art. 14 establece: "La protección integral de la familia"; "la defensa del bien de familia"; "la compensación económica familiar".

II.

Sin entrar a considerar los casos específicos propios de protección a las personas en general, se analizarán aquellos aspectos en que las normas protegen las relaciones familiares.

Empezando por el matrimonio, la norma crea entre los cónyuges un vínculo jurídico institucionalizado con la categoría de matrimonio, con deberes y obligaciones recíprocas. El art. 198 del Código Civil establece: "Los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos" y el art. 199: "Deben convivir en una misma casa", que "los esposos fijarán de común acuerdo" (art.200).

Los derechos-deberes arriba enumerados deben ser observados por ambos cónyuges, previendo la ley sanciones en caso de su inobservancia, que tienen como objetivo la protección del matrimonio y por ende de la familia.

1) Con relación a la fidelidad, el cónyuge afectado puede hacer uso de lo dis-

puesto en el art. 202 del Código Civil, sancionando al cónyuge infiel con la declaración de culpabilidad en la separación ya sea por las causales del inc. 1º de adulterio o por el 4º de injurias graves, causales que son idénticas a las del art. 14º de divorcio vincular. Asimismo, el cónyuge inocente podrá requerir del culpable mantener el nivel económico de que gozaron durante su convivencia, teniendo en cuenta los recursos de ambos (art. 207 del Código Civil), manteniendo su vocación hereditaria (art. 3574 C.C.) salvo que incurriera a su vez en las causales de pérdida de alimentos y de vocación hereditaria si viviera en concubinato o incurriera en injurias graves contra el otro cónyuge (arts. 210 y 3574 in fine C.C.). Puede darse también el caso de revocarse las donaciones hechas en convención matrimonial (art. 213 del C.C.).

2) La asistencia se refiere al plano espiritual de los cónyuges y comprende además la mutua ayuda, el cuidado y atención en la enfermedad, en el desempeño de las tareas laborales o aun propias de la casa. Consideramos que la falta de asistencia es asimilable a la injuria grave del inc.4 del art.202 C.C.

La protección familiar se extiende a los casos de incapacidad parcial del cónyuge, en el caso especial de que se pida la separación personal en razón de alteraciones mentales graves de carácter permanente, alcoholismo o adicción a la droga, del otro cónyuge, si tales afecciones provocan trastornos de conducta que impidan la vida en común o la del cónyuge enfermo con los hijos. En este caso, quien pidiera la separación personal por alguna de estas causales deberá además de lo dispuesto en el art. 207 procurar al cónyuge enfermo los medios necesarios para su tratamiento y recuperación, teniendo en cuenta las necesidades y recursos de ambos cónyuges. Fallecido el cónyuge obligado, aunque se hubiera disuelto el vínculo matrimonial por divorcio vincular con anterioridad, la prestación será carga de su sucesión debiendo los herederos proveer, antes de la partición, el modo de continuar cumpliéndola (art. 208 CC).

En caso de inhabilitación de uno de los cónyuges por aplicación del art. 152 bis o de incapacidad por causa de enfermedades mentales, que mengüen la aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes el art.141, la ley faculta al esposo o esposa no separados personalmente o divorciados vincularmente a solicitar la protección legal para impedir que el cónyuge que dio causa a alguno de estos supuestos ejecute actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio. Ello más aún en el caso especial del inc. 3º del art. 152 bis cuando el cónyuge por actos de prodigalidad expusiese a su familia a la pérdida del patrimonio. En tales casos, el otro cónyuge tendrá el deber de asistirlo, ya sea como su curador o su asistente. (art.476 CC).

La ley también protege al matrimonio en forma de asistencia de los infortunios derivados del trabajo, tal como lo prescriben el art. 248 de la ley 20744, y de las consecuencias de los hechos ilícitos, tal como lo prescriben los arts.

1080: "El marido y los padres pueden reclamar pérdidas e intereses por las injurias hechas a la mujer y a los hijos", y el 1084: "Si el delito fuere de homicidio, el delincuente tiene la obligación de pagar todos los gastos hechos en la asistencia del muerto y en su funeral; además lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto, quedando a la prudencia de los jueces, fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla", entre otros. La jurisprudencia ha señalado que el concepto de viuda también comprende al esposo viudo. En fallos aislados se ha otorgado la indemnización prevista por el art. 1084 a la concubina que hubiere tenido hijos con el causante.

En materia de derecho sucesorio también se protegen los bienes del matrimonio otorgándole vocación sucesoria al conyuge supérstite en concurrencia con hijos y padres del causante (arts. 3570 y 3571 del CC). Es de hacer notar que la Ley 23264 amplió el derecho del cónyuge supérstite al concurrir con los ascendientes en los bienes gananciales.

3) Otro de los supuestos a contemplar derivados del art. 198 del CC consiste en la obligación alimentaria que la ley prevé a cargo recíproco de ambos cónyuges (art. 209 CC). La inobservancia de la obligación alimentaria acarrea el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar previsto por el art. 2º inc. d de la Ley 13944.

4) El art. 199 del CC establece que: "Los esposos deben convivir en una misma casa, a menos que por circunstancias excepcionales se vean obligados a mantener transitoriamente residencias separadas. Podrán ser relevados (sólo) judicialmente del deber de convivencia cuando ésta ponga en peligro cierto la vida, o la integridad física, o espiritual de uno de ellos, de ambos o de los hijos". "Cualquiera de los cónyuges podrá requerir judicialmente se intime al otro a reanudar la convivencia interrumpida sin causa justificada bajo apercibimiento de negarle alimentos".

No sólo la ley sanciona la falta de cohabitación con la posibilidad de la pérdida de alimentos, sino que también es causal de separación personal y de divorcio vincular (art. 202, inc. 5º y 214, inc. 1º CC).

En materia sucesoria, el cónyuge supérstite tendrá derecho real de habitación en forma vitalicia y gratuita del inmueble que hubiere constituido el hogar conyugal (art. 3573 bis CC).

La Ley 23515 estableció en nuestro régimen jurídico el divorcio vincular. ¿Qué incidencia tuvo la Ley 23515 en materia de matrimonio? De acuerdo a las estadísticas del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Capital Federal, los guarismos son los siguientes:

AÑO	MATRIMONIOS	DIVORCIOS
1978	22.138	3.721
1979	19.752	4.150
1980	19.981	3.493
1981	16.606	3.054
1982	17.571	2.951
1983	18.970	3.154
1984	19.502	3.267
1985	18.203	3.184
1986	17.416	3.243
1987	19.478	13.056
1988 1er. semestre	12.673	8.896

III.

Se han visto las normas jurídicas dictadas en relación al matrimonio, corresponde ahora efectuar un análisis de las prescripciones legales en relación a los hijos.

Los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres. Tienen éstos la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, sino con los suyos propios (art. 265 CC).

Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Aunque estén emancipados, estarán obligados a cuidarlos en su ancianidad y en estado de incapacidad o enfermedad y a proveer a sus necesidades en todas las circunstancias de la vida en que les sean indispensables sus auxilios (art. 266 CC).

El art. 267 aclara qué comprende la obligación alimentaria, que es "La satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad. Vale decir que la ley impone a los padres un conjunto de obligaciones y le da ciertos derechos de muy variada índole, abarcando el espectro de necesidades espirituales, y de carácter económico que el menor necesita para su desarrollo. Estos derechos y obligaciones se suspenden y se pierden por las causales previstas por los arts. 307, 308 y 309 del CC.

A su vez el art. 310 establece que: "Perdida la autoridad por uno de los progenitores o suspendido uno de ellos en su ejercicio, continuará ejerciéndola el otro...".

Los padres son curadores de los hijos solteros o viudos que no tengan hijos mayores de edad que pueden desempeñar la curaduría (art. 478 CC), y tienen la facultad de discernir la tutela de sus hijos menores (art. 383 del CC).

En materia de derecho sucesorio los hijos heredan a sus padres conforme lo establece el art. 3565 del CC.

En materia de hechos ilícitos: "El padre y la madre son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores que habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran mayores de diez años..." (art. 1114 del CC).

En todos los casos la protección a los menores se encuentra integrada con el Ministerio de Menores que es parte legítima y esencial en todo acto (arts. 494 del CC).

En materia de nacimientos las estadísticas demuestran que la tasa de natalidad resulta decreciente en la Capital Federal según las siguientes estadísticas.

El estado establece la protección de menores que se encuentran materialmente o moralmente en peligro o abandonados mediante la intervención judicial pudiendo disponer preventivamente de estos ya sea mediante la libertad vigilada o entregándolos al Consejo Nacional del Menor, (art. 14 ley 10903). Por la ley 20.111 se reglamenta la organización del Servicio Nacional del Menor, que es un órgano descentralizado que ejerce la conducción intermedia entre la subsecretaría del Menor y la Familia y las unidades operativas de asistencia y de protección del menor y de orientación y formación Integral (hacer la lista de Institutos integrales con la lista de Bajas y Altas, estos está enumerados en los anexos I y II de la misma ley.) En el caso de los menores que son autores de delitos, estos son reclusos de acuerdo al grado de peligrosidad y de edad en los denominados Institutos de Admisión: Santa Rosa, Roca, Otamendi, etc.

AÑO	NACIMIENTOS	ADOPCIONES
1978	95.838	
1979	97.300	
1980	96.185	
1981	92.092	
1982	88.318	
1983	83.821	
1984	81.782	709
1985	82.688	671
1986	84.047	560
1987	81.437	545
1988 1er.semestre	35.722	277

La adopción se encuentra legislada por la ley 19.134 con la que se trata de cubrir el vacío en principio en cuanto se les proporciona una familia a los menores desamparados o desviados y en segundo lugar a aquellos matrimonios que ven frustrada su paternidad o imposibilitada por causas externas a ellos.

IV.

En cuanto a la protección de la familia en general es importante mencionar la Ley 11723, que en su art. 31 preceptúa en defensa del derecho a la imagen: "El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta ésta de su cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos o en su defecto del padre o de la madre".

El Pacto de San José de Costa Rica, dice en su art. 11: "Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación".

Párrafo aparte merece la ley de trasplante de órganos que de alguna manera protege a la familia de la falta de salud de alguno de sus miembros proporcionando, con los alcances de la Ley 21541 modificada por la Ley 23464, la posibilidad de la extracción de órganos o materiales anatómicos en vida con fines de trasplante.

El art. 13^a de la ley dispone: "La persona capaz, mayor de edad, podrá voluntariamente disponer la ablación en vida de algún órgano o material anatómico de su propio cuerpo con fines de trasplante, en tanto el receptor sea padre, madre, hijo o hermano consanguíneo del dador. Asimismo, cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen, podrán efectuarse trasplantes entre parientes consanguíneos en línea recta de segundo grado y colaterales hasta el cuarto grado, entre cónyuges y entre padres e hijos adoptivos...". Cabe aclarar que esta operación podrá realizarse cuando se trata de implantes, es decir de órganos no renovables y de ambas personas vivas. Para el caso de muerte, se respetará el deseo del muerto y en su defecto lo que decidan los parientes en grado más cercano.

En materia de seguridad encontramos un cuadro alarmante, que revela una falta de amparo de la familia argentina según las siguientes estadísticas:

HECHOS DELICTIVOS

AÑO	TOTALES GENERALES	CONDENAS	% DE CONDENAS
1981	257.271	22.241	8,64
1982	314.916	18.197	5,78
1983	351.484	19.764	5,62
1984	390.901	19.707	5,01
1985	430.039	15.301	3,55

Esta prieta síntesis no puede concluir sin hacer somera referencia a la política que en materia familiar efectúa el Estado para su protección, desde el punto de vista Previsional a través de la ley 18.037 y 18.038, el Seguro colectivo de Vida Obligatorio (dec.1567/74, Resol. Nº11.945 Super intendencia de Seguro), Asignaciones Familiares (ley 18.017) Creac. de CASFEC Dec. Ley 16.811, Sistema Integral de Protección del Discapacitado (Ley 22.431), tanto en materia familiar como asistencia médico hospitalaria y prevención del delito y de accidentes.

Las estadísticas que reflejan la política del Estado en las materias aludidas han sido preparadas por la Dra. Viviana Ramirez de Cuesta y son las siguientes:

MOVIMIENTO HOSPITALARIO - CONSULTORIOS EXTERNOS
Hospitales Municipales - Consultas Externas por año, a partir de 1978

AÑOS	CONSULTAS
1978	3.929.469
1979	4.040.852
1980	3.963.761
1981	3.968.174
1982	4.165.498
1983	4.633.974
1984	5.335.207
1985	5.280.918
1986	5.109.105
1987	5.257.107

MOVIMIENTO HOSPITALARIO - INTERNACIONES

Hospitales Municipales. Ciudad de Buenos Aires.

Período: a partir de 1978.

AÑO	DIA - CAMA DISPONIBLE	PROMEDIO DIA - CAMA DISPONIBLE	PACIENTE- DIA	PROMEDIO PACIENTE- DIA	PROMEDIO DE PERMANENCIA	PORCENTAJE OCUPACIONAL	TOTAL DE EGRESOS
1978	2.723.524	7.461,7	1.934.219	5.299,2	13,5	71,0	143.293
1979	2.404.648	6.588,1	1.788.363	4.899,6	12,4	74,4	143.880
1980	2.271.073	6.205,1	1.805.506	4.933,1	12,4	79,5	145.430
1981	2.223.299	6.091,5	1.666.579	4.566,0	12,2	75,0	136.141
1982	2.192.582	6.007,1	1.686.944	4.621,8	12,3	76,9	137.439
1983	2.201.352	6.031,1	1.697.118	4.649,6	12,6	78,9	137.711
1984	2.244.582	6.149,5	1.761.608	4.826,3	12,5	78,5	139.822
1985	2.303.957	6.312,2	1.712.704	4.692,3	11,8	74,3	145.087
1986	2.230.051	6.109,7	1.631.758	4.470,6	11,4	73,1	143.336
1987	2.151.287	5.893,9	1.637.072	4.485,1	11,4	76,1	144.481

SUICIDIOS

	1983	1984	1985	1986	1987
ENE.	31	34	37	40	32
FEB.	21	21	30	20	32
MAR.	28	21	25	34	46
ABR.	25	18	26	24	46
MAY.	22	32	35	40	26
JUN.	23	22	29	38	29
JUL.	19	25	26	26	
AGO.	29	20	32	37	
SET.	28	34	29	36	
OCT.	26	32	45	38	
NOV.	27	38	30	40	
DIC.	25	32	28	54	
TOTAL	304	329	372	427	

ACCIDENTES FERROVIARIOS

	1983	1984	1985	1986	1987
ENE.	18	10	13	15	14
FEB.	8	13	10	16	9
MAR.	10	10	12	15	17
ABR.	6	16	10	9	13
MAY.	8	12	10	12	11
JUN.	9	9	8	14	13
JUL.	16	9	15	14	
AGO.	13	21	18	15	
SET.	11	14	8	15	
OCT.	13	10	16	11	
NOV.	7	7	20	17	
DIC.	20	6	16	7	
TOTAL	139	137	156	160	

ACCIDENTES EN EL DOMICILIO

	1983	1984	1985	1986	1987
ENE.	16	15	22	26	12
FEB.	16	15	18	16	10
MAR.	13	20	13	13	16
ABR.	15	16	74	12	23
MAY.	9	23	24	17	23
JUN.	31	23	36	21	19
JUL.	31	27	27	31	
AGO.	20	27	11	18	
SET.	25	32	15	18	
OCT.	15	16	13	19	
NOV.	12	13	16	17	
DIC.	23	14	19	17	
TOTAL	226	241	288	225	

ACCIDENTES DE TRABAJO

	1983	1984	1985	1986	1987
ENE.	7	14	6	2	9
FEB.	6	6	10	6	10
MAR.	8	9	7	7	11
ABR.	6	7	7	7	4
MAY.	5	9	7	6	6
JUN.	9	9	1	6	8
JUL.	3	7	3	6	
AGO.	3	5	1	4	
SET.	4	8	1	10	
OCT.	1	5	4	13	
NOV.	2	1	1	7	
DIC.	6	5	6	4	
TOTAL	60	85	54	78	

ACCIDENTES DE TRANSITO

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
ENE.	22	8	19	31	26	20	19
FEB.	11	8	22	24	23	22	16
MAR.	16	13	35	39	25	24	31
ABR.	12	14	22	24	32	23	28
MAY.	17	13	22	39	30	27	33
JUN.	16	12	22	38	21	31	26
JUL.	18	10	24	26	38	30	
AGO.	19	8	24	26	30	30	
SET.	15	8	31	34	22	28	
OCT.	16	11	30	36	29	38	
NOV.	13	10	30	40	21	33	
DIC.	15	3	22	21	30	30	
TOTAL	190	118	303	378	327	336	

Si bien existe una normativa jurídica que protege a las personas unidas por vínculos de parentesco que llamamos familia, la política estatal en la materia no resulta acorde con dichos postulados y no existe una política de amparo y seguridad a la misma.